Señores

**JUZGADO DOCE (12) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI, VALLE**

[J12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:J12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**REFERENCIA:** VERBAL

**DEMANDANTE:** HUGO FERNELIS MURILLO VALENCIA Y OTROS

**DEMANDADOS:** ALVARO ENRIQUE SOTO NARVAEZ Y OTROS.

**RAD:** 76001-31-03-012-**2023-00181**-00

**ASUNTO:** CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, domiciliado y residente en la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con oficina en la Avenida 6 A Bis # 35N – 100 – Centro Empresarial de Chipichape – Oficina 212, actuando en el presente proceso en mi calidad de apoderado general de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.,** en virtud del poder otorgado mediante escritura pública número 13771, del 1 de diciembre de 2014, en la Notaría 29 del Círculo de Bogotá D.C. sociedad anónima identificada con NIT 860.037.013-6, con dirección de notificaciones [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co); de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que procedo en primer lugar, a **CONTESTAR LA DEMANDA** formulada por Hugo Fernelis Murillo Valencia y otros, en contra de Compañía Mundial de Seguros y Otros, anunciando desde ahora que me opongo a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

**OPORTUNIDAD PROCESAL**

La presente contestación de demanda se allega en tiempo oportuno, de acuerdo con lo que a continuación refiero:

* El día 14 de junio del 2024 se envió por medio de correo electrónico notificación electrónica en los términos del artículo 08 de la ley 2213 del 2022, la demanda junto sus anexos y el auto admisorio.
* El artículo 08 de la ley 2213 del 2022 establece que “*(…) la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje (…)”.*
* En virtud de lo anterior, la notificación se entendió realizada el día 18 de junio del 2024, es decir, que a partir del día 19 de junio del 2024 empezaron a contar los 20 días hábiles para contestar la demanda en los términos del Código General del Proceso. Por lo tanto, el término fenece el día 17 de julio del 2024. En este orden de ideas estamos en término para presentar la contestación a la demanda.

1. **PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**FRENTE AL HECHO “1.”:** No nos consta que el pasado 22 de febrero de 2022, en la dirección indicada en este hecho, se hubiese producido la colisión entre los vehículos de placas VCN 804 y TUP 25C y tampoco las circunstancias de tiempo, modo o lugar que enmarcaron el accidente de tránsito descrito. Lo anterior debido a que son premisas fácticas que exceden el conocimiento de mi representada como compañía de seguros, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste.

**FRENTE AL HECHO “2.”:** No nos consta lo esgrimido por el extremo actor dentro del presente hecho, debido a que es una apreciación respecto de la cual mi representada no tiene conocimiento. En virtud de esto y de la carga impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso, el extremo actor deberá acreditar su dicho bajo las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para tales efectos.

**FRENTE AL HECHO “3.”:** No nos consta lo esgrimido por el extremo actor dentro del presente hecho, debido a que es una apreciación respecto de la cual mi representada no tiene conocimiento. En virtud de esto y de la carga impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso, el extremo actor deberá acreditar su dicho bajo las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para tales efectos. No podrá perder de vista el Despacho que de acuerdo con las pruebas documentales obrantes dentro del proceso no obra registro civil que acredite el vinculo de consanguineidad deprecado, de manera que, no se encuentra probada la legitimación en la casa por activa de la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez.

**FRENTE AL HECHO “4.”:** No nos consta lo esgrimido por el extremo actor dentro del presente hecho, debido a que es una apreciación respecto de la cual mi representada no tiene conocimiento. En virtud de esto y de la carga impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso, el extremo actor deberá acreditar su dicho bajo las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para tales efectos. Sin embargo, podrá notar el Despacho que la parte actora pretende probar el presente hecho a partir de una declaración extraproceso. Prueba documental que no es idónea para demostrar la relación que enrostra el actor. Adicionalmente, pese a que no se aporta registro civil de matrimonio o acta por la que se declara la unión marital de hecho, no podrá perder de vista el Despacho que la parte demandante no podrá constituir su propia prueba y en este sentido al ser una declaración en la que intervienen dos personas que actúan como parte demandantes dentro del presente proceso dicha probanza no tiene mérito probatorio alguno.

**FRENTE AL HECHO “5.”:** No nos consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es una apreciación subjetiva sin fundamento probatorio alguno. Adicionalmente, es una circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste.

**FRENTE AL HECHO “6.”:** No nos consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es una afirmación sin soporte probatorio alguno. Adicionalmente, es circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste. Sin embargo, note su señoría, como la parte demandante no allega siquiera una certificación laboral, comprobante de ingreso, contrato de prestación de servicios, declaración de impuestos, o algún otro elemento probatorio que pudiese dar razones de juicio al Despacho para poder determinar que en efecto el señor Hugo Fernelis Murillo al momento del accidente laboraba y devengaba los ingresos que afirma en su escrito de demanda.

**FRENTE AL HECHO “7.”:** No nos consta lo afirmado en este hecho, ya que no existe soporte probatorio alguno y mi representada no tiene conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo o lugar que enmarcaron la ocurrencia del accidente de tránsito. El actor deberá probar sus afirmaciones bajo la carga dinámica de la prueba impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso**.** Debe resaltarse su señoría que la imagen presentada por el extremo demandante en el presente fundamento fáctico no puede constituirse de forma alguna como prueba que acredite las condiciones que tenía el lugar donde presuntamente ocurrió el accidente. Lo anterior debido a que no obra dentro del expediente información alguna que acredite, en virtud de los principios de lealtad procesal y de legalidad, la fecha en que fue tomada dicha imagen o si corresponde efectivamente al lugar en el que ocurrió el accidente. Y en tanto dicha falencia exista, es improcedente otorgar valor probatorio alguno a lo que trata de presentar equívocamente el demandante.

**FRENTE AL HECHO “8.”:** No nos consta lo afirmado en este hecho, ya que no existe soporte probatorio alguno y mi representada no tiene conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo o lugar que enmarcaron la ocurrencia del accidente de tránsito. El actor deberá probar sus afirmaciones bajo la carga dinámica de la prueba impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso**.** Debe resaltarse su señoría que la imagen presentada por el extremo demandante en el presente fundamento fáctico no puede constituirse de forma alguna como prueba que acredite las condiciones que tenía el lugar donde presuntamente ocurrió el accidente. Lo anterior debido a que no obra dentro del expediente información alguna que acredite, en virtud de los principios de lealtad procesal y de legalidad, la fecha en que fue tomada dicha imagen o si corresponde efectivamente al lugar en el que ocurrió el accidente. Y en tanto dicha falencia exista, es improcedente otorgar valor probatorio alguno a lo que trata de presentar equívocamente el demandante.

**FRENTE AL HECHO “9.”:** No nos consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es una apreciación subjetiva y sin fundamento probatorio alguno. Adicionalmente, es circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste. No podrá perder de vista el Despacho que dentro del expediente no obra prueba alguna que determine que el exceso de velocidad o la falta de observancia de la señales de tránsito ejercida por el conductor del vehículo de placas VCN 804, pues dichas afirmaciones deben ser corroboradas de forma técnica dadas las notables incongruencias y falta de claridad que contiene el IPAT.

Aunado a esto es importante poner en conocimiento desde ya el Despacho, que el único medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes pretende acreditar que el vehículo de placas VCN 804 tiene responsabiliad a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de febrero del 2022, es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, pues dentro del plenario no hay pruebas que acrediten lo allí reseñado. Es importante precisar que, este documento no es una prueba pericial ni técnica de responsabilidad, únicamente tiene la finalidad de brindar información general acerca del accidente ocurrido, pero con el fin de corregir o de evaluar si la causa del mismo puede ser alertada por parte de los organismos de tránsito y así prevenir futuros accidentes. Igualmente, no se puede soslayar que, el agente encargado de levantar el IPAT del mentado accidente, únicamente arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos.

**FRENTE AL HECHO “10.”:** No nos consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es una apreciación subjetiva y sin fundamento probatorio alguno. Adicionalmente, es circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste. Sin embargo, no podrá perder de vista el Despacho que dentro del expediente no obra prueba alguna que determine de forma fehaciente la responsabilidad del conductor del vehículo de placas VCN 804, pues dichas afirmaciones deben ser corroboradas de forma técnica dadas las notables incongruencias y falta de claridad que contiene el IPAT.

**FRENTE AL HECHO “11.”:** No nos consta de manera alguna lo afirmado en este hecho. No podrá perder de vista el Despacho que dentro del expediente no obra prueba alguna que determine que el exceso de velocidad o la falta de observancia de la señales de tránsito ejercida por el conductor del vehículo de placas VCN 804, pues dichas afirmaciones deben ser corroboradas de forma técnica dadas las notables incongruencias y falta de claridad que contiene el IPAT.

Aunado a esto es importante poner en conocimiento desde ya el Despacho, que el único medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes pretende acreditar que el vehículo de placas VCN 804 tiene responsabiliad a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de febrero del 2022, es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, pues dentro del plenario no hay pruebas que acrediten lo allí reseñado. Es importante precisar que, este documento no es una prueba pericial ni técnica de responsabilidad, únicamente tiene la finalidad de brindar información general acerca del accidente ocurrido, pero con el fin de corregir o de evaluar si la causa del mismo puede ser alertada por parte de los organismos de tránsito y así prevenir futuros accidentes. Igualmente, no se puede soslayar que, el agente encargado de levantar el IPAT del mentado accidente, únicamente arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos.

**FRENTE AL HECHO “12.”:** No nos consta directamente lo afirmado en este hecho. Sin embargo, de acuerdo con el certificado, que obra dentro del expediente es cierto que el señor Álvaro Enrique Soto Narvaez era el propietario del vehículo al momento del accidente.

**FRENTE AL HECHO “13.”:** No es cierto como lo pretende hacer valer el extremo demandante. Si bien no se desconoce que exitieron dos contratos de seguros materializados en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 con vigencia entre el 15 de marzo del 2021 y el 15 de marzo del 2022, y en la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual Combinada Para Vehículos De Servicio Público No. 2000129513 con vigencia del 15 de marzo del 2021 al 15 de marzo del 2022, éstas NO puede hacerse exigible debido a que: (i) las Pólizas no prestan cobertura material en virtud de que se configuró la causal de exclusión contenida dentro del numeral 2.14 del clausulado general debido a que el conductor del vehículo asegurado no portaba licencia de conducción al momento del accidente; (ii) en todo caso, no acaeció el riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del conductor del vehículo asegurado de placa VCN 804 en la ocurrencia del accidente de tránsito, toda vez que no obra prueba alguna que acredite la supuesta conducta negligente desarrollada por este, pues dichas afirmaciones deben ser corroboradas de forma técnica dadas las notables incongruencias y falta de claridad que contiene el IPAT aportado con la demanda. En este orden de ideas, la obligación indemnizatoria de la compañía de seguros de cara a ls aseguramientos mencionados, no resulta exigible.

**FRENTE AL HECHO “14.”:** No es un hecho sino la interpretación equívoca y erronea que hace el apoderado del extremo actor del artículo 1128 del Código de Comercio. Facultad, que en el marco de un proceso judicial, sólo le corresponde al operador jurisdiccional. Ahora bien, note su señoria como dentro del presente hecho el actor no es claro en referir a cuál Póliza hace referencia pues como lo manifiesta en hechos anteriores, existieron dos contratos de seguros. Ahora, aun cuando carece de claridad el presente fundamento fáctico, en caso de que el demandante haga referencia a cualquier de ambos contratos mencionados, por los cuales se vincula a mi representada a este caso, deberá tenerse en cuenta que en virtud del artículo 1056 del Código de Comercio no puede exigirse la afectación de estos seguros para amparar los eventos que describe el demandante, puesto que además de que se configuró una causal de exclusión y no se probó lel acaecimiento del riesgo asegurado, en todo caso, la Compañía Mundial de Seguros S.A. no asumió el riesgo de las costas del proceso, dictamenes periciales y pago de abogados a las que hace referencia el demandante y demás, por tanto, se reitera, no se puede exigir su cobertura en concordancia con lo dispuesto, de igual manera, en el artículo 1602 del Código Civil.

**FRENTE AL HECHO “15.”:** Note su señoría que dicha persona: “Sergio Andrés González Varonano”, no se encuentra vinculada al proceso por lo que no puede constituirse este fundamento como una circunstancia de tiempo, modo o lugar que soporte las pretensiones de la demanda. Pese a lo anterior, aunque no se señala expresamente, en el eventual caso en que se considere que las lesiones son asumibles al señor Hugo Fernelis Murillo, entonces debe tenerse en cuenta que mi representada tampoco le constan las lesiones como consecuencia del accidente de tránsito referido en el escrito de demanda. Lo anterior debido a que la compañía de seguros que represento no funge como una institución prestadora del servicio de salud o tiene alguna relación con la institución médica donde fue atendido el demandante. Por lo cual, solicito al Despacho realizar un juicioso análisis sobre los medios probatorios allegados al expediente pues no es posible verificar de forma fehaciente lo aducido por el actor de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso. En todo caso, se reitera que, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud de los contratos de seguros que ampara al vehículo de placas VCN 804, y que estos no prestan cobertura material para los hechos que nos asisten y en todo caso, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehiculo asegurado ni de las circunstancias reales del accidente de tránsito, no es posible atribuir a este úlltimo, al asegurado, ni a mi mandante, responsabilidad alguna respecto de las lesiones que eventualmente hubiese sufrido el señor Hugo Fernelis Murillo Valencia.

**FRENTE AL HECHO “16.”:** No nos consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste. En todo caso, se reitera que, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud de los contratos de seguros que amparan al vehículo de placas VCN 804, y que estos no prestan cobertura material para los hechos que nos asisten y en todo caso, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehiculo asegurado ni de las circuntanscias que enmarcaron la ocurrencia del accidente de tránsito, no es posible atribuir a este úlltimo, al asegurado, ni a mi mandante, responsabilidad alguna respecto de las lesiones que eventualmente hubiese sufrido el señor Murillo Valencia.

**FRENTE AL HECHO “17.”:** No nos consta lo aducido por el extremo actor en el presente hecho en virtud de que es circunstancia totalmente ajena a la actividad que ejerce mi representada, motivo por el cual la parte actora deberá probar su dicho de acuerdo a la carga dinámica de la prueba que le asiste.

**FRENTE AL HECHO “18.”:** No nos consta lo afirmado en este hecho, ya que no existe soporte probatorio alguno y mi representada no tiene conocimiento de dichas circunstancias. Pudo el demandante allegar comprobante o prueba documental del trámite que enuncia se está adelantando pero no lo hizo y en ejercicio del artículo 167 y 173 del Código General del Proceso, debió incorporar el medio probatorio dentro de la oportunidad procesal correspondiente. El actor deberá probar sus afirmaciones bajo la carga dinámica de la prueba impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso**.** En todo caso, se reitera que, teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud de los contratos de seguros que amparan al vehículo de placas VCN 804, y que estos no prestan cobertura material para los hechos que nos asisten y en todo caso, no existe prueba de la supuesta responsabilidad atribuida al conductor del vehiculo asegurado, no es posible atribuir a este úlltimo, al asegurado, ni a mi mandante, responsabilidad alguna respecto de las lesiones que eventualmente hubiese sufrido el señor Murillo Valencia o su eventual pérdida de capacidad laboral.

**FRENTE AL HECHO “19.”:** de la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias apreciciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

* Se aclara que por parte del conductor del vehículo de placa VCN 804, no hubo ninguna imprudencia o impericia. Es importante poner en conocimiento desde ya el Despacho, que el único medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes pretende acreditar que el vehículo de placas VCN 804 tiene responsabiliad a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de febrero del 2022, es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, pues dentro del plenario no hay pruebas que acrediten lo allí reseñado. Se precisa que, este documento no es dictamen pericial ni técnico de responsablidad, únicamente tiene la finalidad de brindar información general acerca del accidente ocurrido, pero con el fin de corregir o de evaluar si la causa del mismo puede ser alertada por parte de los organismos de tránsito y así prevenir futuros accidentes. Adicional a ello, se evidencia que posterior al levantamiento del IPAT de requerir información adicional de los hechos que rodearon la colisión es necesario adelantar una investigación aparte. Igualmente, no se puede soslayar que, el agente encargado de levantar el IPAT del mentado accidente, únicamente arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos.
* No nos constan las circunstancias descritas en este hecho repsecto de la presunta afectación causada a los demandantes como resultado del accidente del 22 de febrero del 2022. Las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes.

**FRENTE AL HECHO “20.”:** de la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias apreciciones, frente a las que me pronunciaré de la siguiente manera:

* Se reitera que por parte del conductor del vehículo de placa VCN 804, no hubo ninguna imprudencia o impericia. Es importante poner en conocimiento desde ya el Despacho, que el único medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes pretende acreditar que el vehículo de placas VCN 804 tiene responsabiliad a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de febrero del 2022, es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, pues dentro del plenario no hay pruebas que acrediten lo allí reseñado. Se precisa que, este documento no es dictamen pericial ni técnico de responsablidad, únicamente tiene la finalidad de brindar información general acerca del accidente ocurrido, pero con el fin de corregir o de evaluar si la causa del mismo puede ser alertada por parte de los organismos de tránsito y así prevenir futuros accidentes. Adicional a ello, se evidencia que posterior al levantamiento del IPAT de requerir información adicional de los hechos que rodearon la colisión es necesario adelantar una investigación aparte. Igualmente, no se puede soslayar que, el agente encargado de levantar el IPAT del mentado accidente, únicamente arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos.
* No nos constan las circunstancias descritas en este hecho en relación con el supuesto daño que se depreca, debido a que las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes. Así mismo se recalcan los argumentos mencionados frente a los hechos anteriores, no existen medio probatorios fehacientes y suficientes que permitan imputar responsabilidad sobre el conductor del vehículo de placas VCN 804.

**FRENTE AL HECHO “21.”:** No me constan las afimaciones expuestas por el extremo actor debido a que son circuntancias totalmente ajenas a la actividad que desarrolla la compañía de seguros que represento. En virtud de lo anterior, pesa sobre la parte actora el deber procesal demostrar lo mencionado con los medios probatorios útiles, pertinentes y conducentes para dicho efecto.

**FRENTE AL HECHO “22.”:** No nos constan las circunstancias descritas en este hecho debido a que las afirmaciones del actor carecen de pruebas y son desconocidas por mi representada. En virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, el actor deberá probar sus dichos con las pruebas pertinentes y conducentes. Así mismo se recalcan los argumentos mencionados frente a los hechos anteriores, no existen medio probatorios fehacientes y suficientes que permitan imputar responsabilidad sobre el conductor del vehículo de placas VCN 804.

**FRENTE AL HECHO “23.”:** Es cierto debido a que la responsabilidad del accidente de tránsito no corresponde en forma alguna al extremo pasivo dentro del presente proceso, en concreto no corresponden al conductor del vehículo de placa VCN 804, a su propietario, ni a Mundial. En virtud del articulo 167 del Código General del Proceso pesa sobre la parte demandante demostrar la responsabilidad civil que pretende declarar con el presente litigio. Sin embargo, no obran dentro del plenario medios probatorios fehacientes y suficientes que permitan imputar responsabilidad sobre el conductor del vehículo de placas VCN 804; además, mi mandante nada prodrá indemnizar luego que las Pólizas no prestan cobertura material en virtud de que operó la causal de exclusión contenida dentro del numeral 2.14 del clausulado general debido a que el conductor del vehículo asegurado no portaba licencia de conducción al momento del accidente.

1. **FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a que prosperen las pretensiones declarativas y de condena, principales y subsidiarias, solicitadas por la parte actora en su escrito de demanda, puesto que, las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, comoquiera que los demandantes pretenden el pago de una indemnización sin que una obligación de esa índole hubiere nacido en cabeza de los demandados, entre otras razones, porque en materia de indemnización de perjuicios además de que el daño y la cuantía del mismo deben estar plenamente comprobados y por ello no es posible que los presuntos daños que presenta la parte actora puedan atribuírsele a la pasiva de este proceso.

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES PRINCIPALES**

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.1.”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que no es posible una declaratoria de responsabilidad en cabeza del conductor del vehículo de placa VCN 804, de su propietario, ni de Mundial de Seguros S.A., en la ocurrencia del accidente del pasado 22 de febrero del 2022. Es importante indicar que el único medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes pretende acreditar que el vehículo de placas VCN 804 tiene responsabiliad a raíz del accidente de tránsito ocurrido el día 22 de febrero del 2022, es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, pues dentro del plenario no hay pruebas que acrediten lo allí reseñado. Es importante precisar que, este documento no es dictamen pericial ni técnico de responsabilidad, únicamente tiene la finalidad de brindar información general acerca del accidente ocurrido, pero con el fin de corregir o de evaluar si la causa del mismo puede ser alertada por parte de los organismos de tránsito y así prevenir futuros accidentes. Adicional a ello, no se puede soslayar que, el agente encargado de levantar el IPAT del mentado accidente, únicamente arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos. Por contera, tampoco resulta atribuible a mi mandante ninguna obligación indemnizatoria a cargo de la póliza, luego que no se probó la ocurrencia de un siniestro, en los términos del Art. 1056 y 1077 del C. Co.

Ahora, es de fundamental importancia que el Despacho tenga en cuenta que, dentro del presente caso, así como fue objetado por la compañía, se configuró la causal de exclusión contenida dentro del numeral 2.14 del clausulado general debido a que el conductor del vehículo asegurado no portaba licencia de conducción al momento del accidente. Lo anterior debido a que dentro de las exclusiones pactadas en las condiciones generales del contrato de seguro se excluye de la cobertura aquel accidente causado cuando el conductor no posea licencia de conducción o habiéndola tenido se encontrare suspendida o cancelada o esta fuere falsa o no fuere apta para conducir el vehículo de la clase o condiciones estipuladas. Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1056 del Código de Comercio y de conformidad con lo establecido contractualmente por las partes intervinientes dentro del contrato de seguro, no es posible que surja la obligación indemnizatoria a cargo de la compañía de seguros que represento, pues el conductor del vehículo asegurado no portaba, como debía hacerlo, la licencia de conducción al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito.

Además, no puede declararse a Compañía Mundial de Seguros como responsable solidariamente, pues es claro que la solidaridad solo tiene origen en una convención de las partes, en la ley y en el testamento, y los contratos de seguros involucrados en el litigio no indican en sus textos, ni en las condiciones particulares o generales condiciones Generales que la obligación condicional asumida por Compañía Mundial de Seguros S.A., sea solidaria. En el caso que nos ocupa, Compañía Mundial de Seguros S.A. ostenta calidad de demandada directa, pero la misma no implica que a la aseguradora se le haga extensible la solidaridad en una remota condena en contra del propietario, el conductor del vehículo de placa VCN 804, pues el contrato de seguro no pacta obligaciones de carácter solidario, ya que la actividad aseguradora no es una de las actividades catalogadas como peligrosas y la solidaridad debe estar expresamente pactada en el contrato o definida en la ley, situaciones que no ocurren en el presente litigio.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.2.:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. En atención a ello, reitero, las pólizas no prestan cobertura material en virtud de que se configuró la causal de exclusión contenida dentro del numeral 2.14 del clausulado general debido a que el conductor del vehículo asegurado no portaba licencia de conducción al momento del accidente. Además, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 5.3.: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de las anteriores que, por las razones ya expuestas, no tienen vocación de prosperidad. Adicionalmente debe increparse que, en el remoto e irreal caso en que se considere la pretensión esbozada por el actor, de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio la aseguradora debe pagar la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha que el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. En consecuencia, dado que el extremo activo no puede demostrar la responsabilidad del vehículo asegurado en la ocurrencia del accidente de tránsito entonces no es posible acreditar el supuesto normativo de la norma previamente mencionada, y como consecuencia lógica, se da al traste la pretensión por concepto de intereses. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC1947-2021 dispuso que la eventual causación de los indicados réditos será a partir de la ejecutoria del presente fallo.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.4.”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.5.”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.5.1. LUCRO CESANTE”: ME OPONGO** a que se declaren probados los perjuicios derivados del lucro cesante solicitados por la parte Demandante, por cuanto resultaba necesario aportar medios probatorios tendientes a acreditar los ingresos percibidos por Hugo Fernelis Murillo Valencia para la fecha del accidente, así como prueba que demuestre la actividad económica desarrollada por él. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En este sentido, no se halla acreditado el lucro cesante que pretende endilgar el demandante al extremo pasivo, debido a que: (i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; (ii) El señor Hugo Fernelis Murillo Valencia no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 22 de febrero del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; y (iii) No se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determine de forma cierta el origen de alguna pérdida.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.6.1. PERJUICIOS MORALES” (SIC): ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo el concepto de daño moral son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil. En efecto, siguiendo dichos derroteros, para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de lesiones, la Corte ha fijado reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad como invalidez y muerte, es decir, la tasación propuesta está sobrestimada. Aun cuando no se encuentre acreditado el nexo de causalidad entre las lesiones y el accidente de tránsito referido en la demanda, en el caso en concreto, no se trata afortundamante de un fallecimiento; y adicionalmente, en el plenario NO reposa un dictamen de pérdida de capacidad laboral que pueda determinar de forma cierta el origen de dicha pérdida ni su fecha de estructuración. También debe tenese en cuenta que, el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso. Por lo tanto, no existe prueba alguna que determine que en efecto los demandantes son acreedores de la indemnización deprecada.

**FRENTE A LA PRETENSION “5.6.2. PERJUICIO A LA VIDA DE RELACIÓN” (SIC): ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. Es preciso resaltar que este tipo de perjuicios se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa, por lo que dicha tasación económica es carente de fundamento y no debe ser considerada. La parte demandante pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de su acreditación, carga que no ha cumplido la parte demandante. En efecto, la parte actora no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de Hugo Fernelis Murillo Valencia y sus familiares, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, dentro del plenario no existen pruebas que permitan demostrar el daño a la vida de relación del demandante y, de todas maneras, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad que invalidez o un fallecimiento. Deberá tener en cuenta el Despacho que en el plenario NO reposa un dictamen de pérdida de capacidad laboral que pueda determinar de forma cierta el origen de dicha pérdida ni su fecha de estructuración. También debe tenese en cuenta que, el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso. Por lo tanto, no existe prueba alguna que determine que en efecto los demandantes son acreedores de la indemnzación deprecada.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6.3. DAÑO A LOS BIENES JURÍDICOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL (EN EL PRESENTE CASO, DAÑO A LA SALUD), LA SIGUIENTE SUMA DE DINERO” (SIC): ME OPONGO**  por cuanto dentro de la jurisdiccion civil el daño a la salud o daño a los bienes jurídicos de especial protección constitucional no son reconocidos de forma autonóma, por lo cual de acuerdo con la doctrina probable de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los mismos son improcedentes tratandose de un caso de responsabilidad civil extracontractual.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.6.4. DAÑO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD” (SIC): ME OPONGO** porque, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión. También debe tenese en cuenta que, el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.7. INTERESES DE MORA” (SIC): ME OPONGO** por cuanto los intereses moratorios se causan a partir del reconocimiento favorable de las pretensiones de la demanda y como estas no tienen vocación de prosperidad entonces no hay causa jurídica para la causación de dichos intereses.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.8. COSTAS Y EN AGENCIAS EN DERECHO”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “5.10. INDEXACIÓN”: ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad.

1. **OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA DEMANDA**

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos:

Vale la pena solicitar al Despacho tomar en consideración lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso, respecto a que, en caso de no ser demostrada la cifra pretendida por concepto de daños patrimoniales, especialmente lo concerniente al lucro cesante, se de aplicación a la sanción allí dispuesta.

No resulta entonces procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de sumas de dinero por concepto de daños patrimoniales. Lo anterior, en tanto que no existe en el plenario del proceso prueba o elemento de juicio suficiente que permita acreditar un daño emergente o un lucro cesante.

En este orden de ideas, es preciso reiterar que la parte demandante tenía entre sus mandatos toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que sobre este particular ha establecido lo siguiente:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento,* ***y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración****, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada (…)[[1]](#footnote-1)”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“(…) Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(…)* ***la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso****; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)”[[2]](#footnote-2)* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto)

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio **frente al lucro cesante**, debe advertirse que:(i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; (ii) El señor Hugo Fernelis Murillo Valencia no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 22 de febrero del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; y (iii) No se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determine de forma cierta el origen de alguna pérdida.

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

# EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA[[3]](#footnote-3)

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en tres (2) grupos. En primer lugar, se abordarán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión a los hechos del 22 de febrero del 2022 y con las pretensiones indemnizatorias invocadas en la demanda y, en segundo lugar, se formularán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro vinculado a este proceso.

Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

**EXCEPCIONES FRENTE A LA INEXISTENTE RESPONSABILIDAD DEPRECADA EN RELACIÓN CON EL VEHÍCULO DE PLACA VCN 804**

1. **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL EN CONTRA DEL SEÑOR JUNIOR MANUEL ALVAREZ COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DE PLACA VCN 804**

Los Demandantes formulan la presente demanda con fundamento en que la causa adecuada del daño fue la conducta imprudente ejercida por parte del señor Junior Manuel Álvarez como conductor del vehículo de placa VCN 804. No obstante, no existe ningún tipo de responsabilidad por parte del señor Álvarez frente a la ocurrencia del accidente del 22 de febrero del 2022. Lo anterior debido a que el único elemento documental con el que se pretende atribuir dicha responsabilidad es el IPAT, no obstante, este no es dictamen de responsabilidad. El agente encargado de levantar el informe arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos. Luego entonces, al ser este el único medio probatorio, no puede atribuirse responsabilidad civil extracontractual como lo pretende el demandante.

En este punto, vale la pena recordar que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional, en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

*“(…) Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad (…)”[[4]](#footnote-4)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(…) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo (…)”[[5]](#footnote-5)*

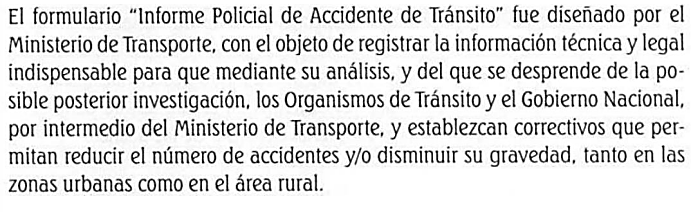
En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar.

En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño. Únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte Demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para la configuración de la responsabilidad civil. En tal sentido, de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil que dispone que quién ha inferido daño a otros está obligado a la indemnización. En relación con tal precepto, cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones causa injustamente un daño a otro y existe además un factor o criterio de atribución subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita traslada dicho resultado dañoso a quien lo ha generado. Surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en favor de la persona que ha sufrido el detrimento y que en todo caso tiene como fin la reparación del daño inferido.

Respecto al valor probatorio que tienen los IPAT, es importante precisar que, en la Resolución No. 0011268 de 2012, se establecen los parámetros para su diligenciamiento por parte de la autoridad competente y además brinda lineamientos a cerca de la finalidad de este documento.

Tal resolución sostiene que:



De una lectura juiciosa de lo anteriormente citado, se puede desprender que este documento únicamente tiene la finalidad de brindar información general acerca del accidente ocurrido, pero con el fin de corregir, de evaluar si la causa del mismo puede ser alertada por parte de los organismos de tránsito y así prevenir futuros accidentes. Adicional a ello, se evidencia que posterior al levantamiento del IPAT de requerir información adicional de los hechos que rodearon la colisión es necesario adelantar una investigación aparte.

También, es pertinente detenerse un momento a analizar que el agente encargado de levantar el IPAT del mentado accidente, únicamente arribó al lugar de los hechos minutos después de ocurrida la colisión, es decir que, no fue un testigo directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, motivo por el cual no puede tenerse como última palabra la apreciación brindada por un sujeto que ni siquiera estuvo en el momento real que ocurrieron los hechos.

Al respecto, vale la pena decir que en el análisis realizado a las pruebas que acompañan la demanda, no se observó en el expediente ninguna que permita demostrar o acreditar la ocurrencia de los hechos tal como fueron planteados por los accionantes. Es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente de tránsito no se encuentran acreditadas al interior del plenario, puesto que la única prueba con la que se pretende esta declaratoria de responsabilidad es el Informe Policial de Accidente de Tránsito que además de tener un contenido ilegible es menester mencionar que este informe se construyó a través de una hipótesis que determinó el agente de tránsito que NO conoció directamente el hecho.

Entonces vale recordar que la jurisprudencia de las altas cortes ha indicado que los informes policiales de accidente de tránsito no son informes periciales sino informes descriptivos, más aún cuando es evidente que el agente de tránsito no es un testigo de los hechos que no presenció el accidente[[6]](#footnote-6). De manera que es improcedente que el Demandante pretenda atribuir responsabilidad a los demandados sin ninguna prueba idónea que logre acreditar con certeza la hipótesis del accidente efectivamente corresponde a la causa eficiente del mismo.

Así mismo, se resalta que de conformidad con la Resolución 001268 de 2000 expedida por el Ministerio de Transporte, el objetivo de diligenciar los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito es identificar las hipótesis de causas de accidentalidad que permitan elaborar diagnósticos para la planificación de correctivos en materia vial con la finalidad de reducir el número de accidentes y/o disminuir su gravedad. Supuesto que dista considerable de establecer la responsabilidad de los vehículos implicados en los accidentes de tránsito. Circunstancia que está en consonancia con lo establecido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia según la cual, el valor probatorio del bosquejo topográfico o del Informe de Policial de Accidentes de Tránsito debe ser apreciado de conformidad con el sistema de apreciación racional, mediante el cual el juez no se encuentra atado por reglas preestablecidas que establezcan el mérito atribuible a los diversos medios de prueba. Por el contrario, “*(…) lo dota de libertad para apreciarlos y definir su poder de convicción, con un criterio sistemático, razonado y lógico (…)*”[[7]](#footnote-7). Es decir, el Informe Policial de Accidente de Tránsito no funge como prueba idónea y suficiente para acreditar un nexo causal en este caso, por tratarse de una mera hipótesis no comprobada, más aún cuando su contenido es totalmente ilegible y no se puede apreciar de forma concreta su información. De manera que, al no existir prueba del nexo de causalidad, es jurídicamente improcedente endilgar cualquier tipo de responsabilidad, debiendo en este punto exonerar totalmente a los Demandados.

En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurran los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente, no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la conducta realizada por el señor Junior Manuel Álvarez como conductor del vehículo de placa VCN 804, y por contera tampoco por su propietario ni mi mandante, y el daño generado.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A ESTE PARTICULAR ES EL DE CULPA PROBADA, TODA VEZ QUE LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN EL ACCIDENTE SE ENCONTRABAN DESARROLLANDO UNA ACTIVIDAD PELIGROSA**

Se formula esta excepción, al margen y sin perjuicio de todo lo anteriormente expuesto, pues los conductores involucrados en los hechos supuestamente acaecidos el 22 de febrero de 2022 se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa, y por tanto la presunción sobre la culpa se neutraliza. En virtud de lo anterior, su señoria deberá analizar en conjunto las pruebas aportadas al plenario y analizar la incidencia de la conducta del conductor del vehículo TUP 25C en el accidente. En este caso, sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, se tiene que de acuerdo con lo referido por el extremo actor en su demanda al momento de la ocurrencia del accidente de transito se encontraba ejerciendo una actividad peligrosa, como lo es la conducción de motocicletas. Por lo cual, el régimen de responsabilidad objetiva al ser el demandante quien también ejercía una actividad peligrosa se desdibuja y debe entonces entrar a valorarse la culpa como elemento de imputación jurídica de responsabilidad. Es decir, que si el demandante pretende imputar responsabilidad a la compañía de seguros que represento, deberá entonces, sin perjuicio de todo lo anterior, demostrar el obrar culposo por parte del extremo pasivo dentro de este proceso.

La Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado y aceptado este concepto, sostiene que en el caso de las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren en el desarrollo o ejercicio de ellas, pues bajo ese entendido el problema se analizaría desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada, y no a la luz del artículo 2356 del Código Civil.

Consecuentemente, no es cierto y tampoco se encuentra acreditado de manera fehaciente, que el conductor del vehículo de placas VCN 804, haya obrado con culpa y que con su actuar, haya ocasionado los supuestos perjuicios por los que hoy pretende ser indemnizado el demandante. Según lo relatado en el escrito de demanda, para el 22 de febrero de 2022, los conductores involucrados en la colisión se encontraban desarrollando una actividad peligrosa, y por consiguiente la presunción sobre la culpa se neutraliza, teniendo la parte actora la carga de acreditarla, como lo decantado suficientemente la Corte Suprema de Justicia, en su jurisprudencia.

En efecto, al adoptar la teoría de la neutralización, dicha corporación ha considerado que, en el caso de las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren desplegando actividades peligrosas, pues aquí el asunto se analiza desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada.

Así las cosas, tenemos que no se tiene en cuenta el artículo 2356 del Código Civil, que se fundamenta en la responsabilidad presunta. Lo anterior, ha sido ya desarrollado por la Corte Suprema de Justicia como a continuación se muestra:

*“(…) Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de este tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del Código Civil, sino del 2341 ibidem, evento en el cual el demandante corría con la cargada de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad extracontractual (…)”[[8]](#footnote-8)*

Así mismo, en otra providencia, la Corte siguiendo la misma línea argumentativa, señala que, la actividad desplegada por las partes es las denominadas peligrosas, razón por al cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, abre que responsabilidad a quien se le demuestre una culpa efectiva[[9]](#footnote-9).

Ahora bien, para el caso que hoy nos ocupa, parta que pueda declararse el nacimiento de una responsabilidad civil en cabeza de los demandados, no basta con la simple formulación del cargo en su contra, sino que resulta imprescindible la prueba de todos los elementos que estructuran la misma, cosa que evidentemente no ha sucedido de acuerdo a la situación fáctica y al acervo probatorio obrante hasta el momento en el plenario.

En el caso que nos asiste, se observa que en efecto, la víctima venía desarrollando una conducta peligrosa, luego que, de acuerdo con el IPAT, el señor Hugo Fernelis Murillo Valencia actuaba en calidad de conductor del vehiculo de placas TUP 25C, es decir, que en efecto, ejercía esta actividad catalogada como peligrosa. Por lo cual su señoría ante esta concurrencia, el Despacho no podrá valorar en este caso meramente en el plano de una responsabilidad objetiva sino la conducta ejercida por el demandante en la ocurrencia del accidente de tránsito para determinar los verdaderos factores que incidieron en la producción del daño.

Por todo lo anterior, en margen de lo que ha sido expuesto en medios exceptivos anteriores, no puede imputarse responsabilidad al extremo pasivo dentro de este proceso pues no puede demostrar un obrar culposo de los demandados y por tanto no se le puede endilgar una responsabildad extracontractual como pretende hacerlo.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito amablemente se declare probada esta excepción.

1. **SUBSIDIARIA - REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO**

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se demuestre que sí existió un hecho generador imputable al señor Hugo Fernelis Murillo Valencia, como conductor del vehículo de placas TUP 25C. Ante esta hipotética circunstancia, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente le vehículo de placas TUP 25C, por lo menos en un 50%. Por supuesto, sin perjuicio de que como ya se demostró en las anteriores excepciones, no hay prueba del nexo de causalidad entre el actuar del señor Junior Manuel Álvarez y el daño.

Todo lo anterior por la compensación de culpas según el precepto contenido en el artículo 2357 del Código Civil, anteriormente indicado, en el que se indica que la reducción de una indemnización se debe por la participación de la víctima. Es decir, si el que ha sufrido el daño se expuso a él imprudentemente. Lo que claramente aconteció en este caso, puesto que no está demostrado que las consecuencias del accidente provengan de los demandados. Conforme a lo dicho, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la víctima en la ocurrencia del daño. Lo anterior, con el propósito de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución al daño que sufrió. Así es como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 19 de noviembre de 1993:

*“(…) para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurran en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según la cual* ***‘[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente’****. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación ‘compensación de culpas (…)”[[10]](#footnote-10)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

En distinto pronunciamiento, la misma corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del 40% de los perjuicios:

*“(…) En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resulta incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.*

*Sin embargo,* ***aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió́ un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.***

*Debió́ entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades.*

*Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40% (…)”[[11]](#footnote-11)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta del vehículo de placas TUP 25C en la producción del daño por el cual solicita indemnización.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, en caso de probarse el señor Murillo Valencia tuvo incidencia determinante y significativa en la ocurrencia del accidente de tránsito acaecido el 22 de febrero de 2022, y que esta es la causa del daño por el cual se pretende indemnización. entonces, deberá declararse que el porcentaje de la causación del daño a lo sumo es del 50%. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación del vehículo de placas TUP 25C en la ocurrencia del accidente, como mínimo en un 50%. Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **AUSENCIA PROBATORIA Y NO ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE DEMANDANTE DE LA SEÑORA LOLIA EMILFA VALENCIA DE RAMIREZ - FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA SEÑORA LOLIA EMILFA VALENCIA DE RAMIREZ**

Por medio del presente medio exceptivo, tal como se hizo al momento de pronunciarme frente a los hechos de la demanda y las pretensiones, se demuestra que en el proceso no obra ningún medio de prueba tendiente a demostrar el vínculo de consanguinidad entre la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez y el señor Hugo Fernelis Murillo Valencia, quien, se afirma en la demanda, es madre del lesionado. Sin embargo, no se allegó el Registro Civil de Nacimiento que demuestre y pruebe dicho parentesco filial, por lo tanto, a la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no le asiste ningún derecho dentro del presente proceso y muchos menos en el eventual y remoto caso de una indemnización.

Nuevamente se recuerda que la legitimación en la causa ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. El Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19753, magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“(…) La legitimación en la causa por activa hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.*

*Según lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no podrá acceder a las pretensiones de la demanda. Si bien la falta de legitimación en la causa se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada a manera de excepción pueda ser resuelta en esta oportunidad procesal, toda vez que, según los dictados del numeral 6 del artículo 180 del CPACA., en el curso de la audiencia inicial, el juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva (…)”[[12]](#footnote-12)*(Subrayado y negrilla fuera de texto).

Por otro lado, la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro del documento denominado registro civil de nacimiento, permite identificar a las personas, individualizándolas al designares un nombre, y un número único de identificación personal, así:

“*(…) La inscripción de una persona en el registro civil de nacimiento permite reconocer su existencia legal e individualizarla con la designación de un nombre y un número único de identificación personal (NUIP). Este registro permite que le sean reconocidos sus derechos y deberes como colombiano, y le permite acceder a los bienes y servicios del Estado (…)*”.

Por su parte, el Decreto 1260 de 1970, sobre el estado civil de una persona, establece que:

“*(…) ARTICULO 1o. <DEFINICIÓN>. El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.*

*ARTICULO 2o. <ORIGEN DEL ESTADO CIVIL>. El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos (…)*”.

La única forma de probar el estado civil de una persona es a través de los mencionados registros civiles, ya sea de nacimiento, matrimonio o defunción. Ahora bien, resulta imperante aportar este tipo de documentos al proceso, pues son el único medio de prueba que permite establecer los vínculos de afinidad que llegaren a tener las partes en el proceso entre sí. Sobre el registro de nacimiento, dice la misma norma:

“*(…) ARTICULO 9o. <REGISTRO DE NACIMIENTO>. El registro de nacimientos se llevará en folios destinados a personas determinadas que se distinguirán con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. Indicarán, también, el número correspondiente a cada persona en el registro o archivo central*”.

“*ARTICULO 11. <CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE NACIMIENTO>. El registro de nacimiento de cada persona será único y definitivo. En consecuencia, todos los hechos y actos concernientes al estado civil y a la capacidad de ella, sujetos a registro, deberán inscribirse en el correspondiente folio de la oficina que inscribió el nacimiento, y el folio subsistirá hasta cuando se anote la defunción o la sentencia que declare la muerte presunta por desaparecimiento*”.

“*ARTICULO 44. <INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE NACIMIENTO>. En el registro de nacimientos se inscribirán:*

*1. Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional.*

*2. Los nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padre y madre colombianos.*

*3. Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de extranjeros residentes en el país, caso de que lo solicite un interesado.*

*4. Los reconocimientos de hijo natural, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas (…)*”.

Ahora, en cuanto al reconocimiento de la paternidad del nacido, también se establece lo siguiente:

“*(…) ARTICULO 58. <RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD>. Presente el presunto padre en el despacho del funcionario encargado de llevar el registro civil y enterado del contenido del folio de registro de nacimiento y de la hoja adicional en la que conste la atribución de paternidad, habrá de manifestar si reconoce a la persona allí indicada como hijo natural suyo o rechaza tal imputación.*

*Si el compareciente acepta la paternidad, se procederá a extender la diligencia de reconocimiento en el folio en que se inscribió el nacimiento, con su firma y la del funcionario.*

*En caso de rechazo de la atribución de paternidad, en la hoja adicional se extenderá un acta, con las mismas firmas (…)”.*

Nótese que, en el caso particular, el apoderado de los demandantes **no** aporta el Registro Civil De Nacimiento del señor Hugo Fernelis Murillo Valencia, por lo que es claro que no puede establecer que efectivamente la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez sea su madre, pues como se ha dicho es el único documento que permite validar de manera cierta dicha filiación, motivo el cual no se probó su legitimación en la causa para ser parte en el presente proceso judicial.

En conclusión, ninguna de las eventuales y remotas condenas que se profieran dentro del presente proceso podrá ir encaminada o reconocida a favor de la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez, pues no tiene ningún vínculo de parentesco con el lesionado, Hugo Fernelis Murillo Valencia, es decir, no existe relación alguna entre ellas, por lo tanto, no está legitimada para actuar.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

**EXCEPCIONES FRENTE A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS INVOCADAS EN LA DEMANDA**

1. **IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE**

Mediante la presente excepción se demostrará al despacho que al demandante no se le pueden reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior, pues frente al lucro cesantedebe advertirse que: (i) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; (ii) El señor Hugo Fernelis Murillo Valencia no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 22 de febrero del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; y (iii) No se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determine de forma cierta el origen de alguna pérdida.

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(…) en cuanto perjuicio,* ***el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual****. (…) Vale decir que el* ***lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente*** *(…) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que* ***conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables*** *(…)”[[13]](#footnote-13).* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera,

M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

*“(…) La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto. (…)*

*En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención.*

***Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio y ii) proceder a su liquidación****.*

*La precisión jurisprudencial tiene por objeto eliminar las presunciones que han llevado a considerar que la indemnización del perjuicio es un derecho que se tiene per se y establecer que su existencia y cuantía deben reconocerse solo: i) a partir de la ruptura de una relación laboral anterior o de una que, aun cuando futura, era cierta en tanto que ya estaba perfeccionada al producirse la privación de la libertad o ii) a partir de la existencia de una actividad productiva lícita previa no derivada de una relación laboral, pero de la cual emane la existencia del lucro cesante (…)”.15* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva, no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica. Lo anterior, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda, fueron calculados sin que exista prueba en el plenario que acredite que Hugo Fernelis Murillo Valencia devengaba algún tipo de ingreso para la fecha del accidente. De tal suerte, que en el caso sub judice no puede presumirse el lucro cesante a favor del demandante como consecuencia del suceso que tuvo lugar el 22 de febrero del 2022, por cuanto no hay prueba fehaciente de ingresos percibidos por el señor Hugo Fernelis Murillo, así como tampoco existe prueba de la actividad económica desempeñada el demandante para la fecha referida.

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente

*“(…) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego,* ***a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable****, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante lo siguiente:

*“(...)* ***resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas*** *o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (…)”[[14]](#footnote-14)* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así las cosas, es claro que para que sea reconocido el lucro cesante futuro deberá demostrarse con un mínimo razonable la certeza el daño y el ingreso a obtener. Por tanto, comoquiera que en el caso en concreto no se acreditó la pérdida capacidad laboral, no hay certeza del daño y mucho menos del eventual ingreso que percibía el señor Hugo Fernelis Murillo Valencia para el momento del accidente, no hay lugar a su reconocimiento. Dicho de otra manera, tomando en consideración que la parte actora no allegó un dictamen de pérdida de capacidad laboral en los términos de la Ley 100 de 1993 o algún documento que pruebe la existencia del daño, se torna improcedente el reconocimiento del perjuicio depreca comoquiera que la certeza es un requisito esencial para su condena.

En conclusión, es improcedente el reconocimiento del lucro cesante al no encontrarse acreditado el valor cierto de los ingresos percibidos por el señor Hugo Fernelis Murillo para el momento del accidente de tránsito ni tampoco prueba de su actividad económica. Es decir, ante la evidente ausencia de un medio probatorio que acredite el valor de los ingresos en el momento el accidente de tránsito y la actividad económica del señor Murillo Valencia es claro que la pretensión encaminada a obtener un reconocimiento por este concepto no está llamada a prosperar. Así mismo, como no se aportó un dictamen pericial que acredite la pérdida de capacidad laboral es totalmente improcedente.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

1. **TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES**

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que han sido reconocidos en casos excepcionales a víctimas cuyas lesiones han sido más graves o incluso en eventos de invalidez y muerte. En este caso en concreto la parte actora de forma equivoca solicita la suma de $208’800.000 excediendo de forma exhorbitante los topes establecidos, cuando ni siquiera una PCL que estableciera de forma cierta una pérdida de capacidad laboral o un nexo de causalidad entre las lesiones y la ocurrencia del accidente de tránsito. También debe tenerse en cuenta que, el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios “*(…) se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables(…)*”[[15]](#footnote-15). Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “*constituye un «regalo u obsequio*»” por el contrario, se encuentra encaminado a “*(…) reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares (…)*”[[16]](#footnote-16), con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia[[17]](#footnote-17).

La Corte ha fijado como baremo indemnizatorio el tope de $60.000.000 para los familiares en primer grado de consanguinidad y afinidad, tal y como se muestra a continuación:

*“(…) Atendiendo las pautas jurisprudenciales establecidas por esta Corporación de cara a las trágicas e inesperadas circunstancias en que aconteció la muerte del señor Ramírez Zuluaga, se fija en la suma de* ***sesenta millones de pesos ($60.000.000)*** *el monto de los perjuicios morales que deberán ser resarcidos a la demandante en su calidad de cónyuge de la víctima (…)*”[[18]](#footnote-18) (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Por tanto, corresponderá al arbitrio del juez determinar el valor del daño moral, teniendo en cuenta los elementos probatorios que reposan en el expediente. Además, teniendo como parámetro y límite que en los más graves casos como lo son del fallecimiento de la víctima, la jurisprudencia ha reconocido una indemnización hasta el $60.000.000 a sus familiares de primer grado de consanguinidad y primero de afinidad. Es por ello, que la suma solicitada de $208’800.000, resulta claramente exorbitante, pues la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil no reconoce tan alta cifra como indemnización por daños morales.

Según la jurisprudencia citada, es menester advertir que (i) es excesivo el valor pretendido por la parte demandante (ii) no hay prueba en el expediente que acredite una lesión tan grave que se supere el 50% de la PCL, así entonces no hay lugar a reconocer el máximo de la indemnización contemplada por los criterios Jurisprudenciales, y (iii) no hay prueba en el proceso que acredite la gravedad de las secuelas, por ende, comoquiera que no hay prueba de la gravedad de las lesiones la tasación deberá desestimarse, pues las pretensiones invocadas por la parte Demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

Adicionalmente, es preciso traer a colación que el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso. Lo anterior en virtud de que no obra dentro del expediente el registro civil correspondiente que acredite el lazo de consanguineidad que es reprochado en el escrito de demanda.

En atención a los argumentos expuestos, la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

“*(…) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño,* ***lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable****. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico (…)*”[[19]](#footnote-19). (Negrillas fuera del texto original).

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, los supuestos fácticos del caso y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Además, la parte demandante solicita valores superiores incluso a los reconocidos en eventos de invalidez y muerte de la víctima y, en el presente caso, se trata de un lesionado, quien, además, ni siquiera cuenta con un dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) que permita determinar la gravedad de las lesiones. Por otro lado, sus peticiones son abiertamente exageradas, inconducentes e injustificadas por cuanto solicita el reconocimiento de sumas de dinero que han sido concedidas excepcionalmente en casos de mayor gravedad. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN Y/O SALUD**

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, en el asunto que nos asiste, la parte demandante está solicitando esta indemnización como consecuencia de la causación de unas lesiones, sin que se haya incorporado prueba suficiente frente a la gravedad de la lesión, ni que efectivamente la misma le genera actualmente una afectación en la forma en la que desarrolla sus actividades normalmente.

Adicionalmente, se advierte que el reconocimiento del daño a la vida en relación, se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa del daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones. De todas maneras, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues, como veremos más adelante, desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, También debe tenerse en cuenta que, el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

*“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.*

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo* malestar (…)”[[20]](#footnote-20).

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar el siguiente caso: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de 50 SMLMV para la víctima directa por los perjuicios causados con la pérdida de la capacidad de locomoción permanente, como consecuencia de accidente de tránsito por exceso de velocidad del vehículo en el que iba de pasajera[[21]](#footnote-21). Nótese que en dicho caso la victima perdió su movilidad de forma definitiva, en cambio en el presente caso no. En otro penoso caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de $ 30.000.000 a la víctima directa **por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo**.

Obsérvese que, en los casos antes referidos, la víctima quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiara abruptamente tras los hechos que motivaron cada una de las anteriores demandas. En el caso particular que nos cita al presente proceso, no se vislumbra un medio de prueba que permita acreditar que el señor Fernelis Murillo tuvo consecuencias permanentes en su corporeidad que afectaron su estilo de vida, su relación con los demás o consigo mismo, ni mucho menos el de sus familiares. Máxime cuando no se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determine de forma cierta el origen de alguna pérdida.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal que se avizore en el demandante, tampoco una secuela que haya impedido continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta en el literal anterior.

En línea con lo anterior, debe resaltarse aquello se ha reafirmado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, **el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa.** En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:

*“(…) b) Daño a la vida de relación: Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (…)”. 21 (Subrayado y negrilla fuera del texto original)[[22]](#footnote-22)*

Además, también es menester señalar otros pronunciamientos de donde se extrae la inviabilidad de condenar al pago de esta tipología de perjuicio a favor de las victimas indirectas, veamos:

**Sentencia SC9193-2017[[23]](#footnote-23)**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

**Sentencia 562-2020[[24]](#footnote-24)**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

De las anteriores sentencias de la Corte Suprema emerge con claridad como el daño a la vida de relación no puede ser reconocido a personas distintas a la víctima directa del daño, esto es al señor Murillo Valencia, por lo cual la situación que en el caso de marras se torna imposible dado que, dentro del escrito de la demanda, se solicita el reconocimiento del daño a la vida en relación, para todos los demandantes. Además, al margen de la improcedencia de reconocer esta tipología de perjuicios a las víctimas indirectas, lo cierto es que las sentencias antes aludidas incluso fijan parámetros a tener en cuenta para la procedencia el daño a la vida de relación, a fin de no confundirse con el daño moral, pues de lo contrario se indemnizaría dos veces un mismo perjuicio.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad, donde al expediente NO se aportó dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL), donde se exponga la gravedad de las lesiones y su repercusión en la vida cotidiana. Se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal y que le haya evitado continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso.

De otro lado, también es preciso traer a colación que el vínculo de parentesco entre el señor Fernelis y la señora Lolia Emilfa Valencia De Ramirez no se haya acreditado dentro del expediente por lo que no es procedente el reconocimiento a favor de esta persona que compone el extremo activo dentro del presente proceso.

Ahora, respecto del daño a la salud, cabe destacar que de acuerdo con los postulados jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia[[25]](#footnote-25), el mismo se encuentra incluido en el daño a la vida en relación, comoquiera que el mismo se deriva internamente del desarrollo de la víctima, *donde se tienen presentes las alteración de carácter emocional como consecuencia del “daño” sufrido en el cuerpo o la salud generando la pérdida o mengua de la posibilidad de ejecución de actos y actividades que hacían más agradable la vida[[26]](#footnote-26)*. En ese orden de ideas, es claro como reconocer el concepto de daño a la salud, en primera medida vulnera los pronunciamientos jurisprudenciales, y, por otro lado, se estría generado una doble indemnización por conceptos que claramente esta unidos y han sido tasados y reconocidos únicamente bajo el concepto de daño a la vida en relación, dando lugar a un enriquecimiento sin causa en cabeza de los demandantes.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, pues no se encuentra plenamente acreditado dentro del presente proceso. Lo anterior, por cuanto el mismo sólo se concede en casos especialísimos a víctimas cuyas lesiones sean de tal gravedad que impacten directamente el estilo de vida de la persona y no de los familiares como también se pretende en la demanda. Sin embargo, el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Además, como se expuso, es exagerado el monto pretendido con relación al presunto daño sufrido, lo debidamente demostrado en el proceso y el baremo jurisprudencial que al respecto ha emitido reiteradamente el órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria especialidad civil.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

1. **INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, CONSECUENTEMENTE NO SE PUEDE ORDENAR SU INDEMNIZACIÓN**

En cuanto a la supuesta pérdida de oportunidad, debo indicar como primera medida que los ánimos de ganancia eventuales o hipotéticos no son susceptibles de sufrir menoscabo, pues la certeza es una característica del daño indemnizable. En el caso que nos ocupa, se tiene que el apoderado de la parte actora en el escrito de demanda no explica cuál es la supuesta oportunidad que ha perdido el señor Murillo Valencia y su grupo familiar aquí demandante y mucho menos se aporta alguna prueba tendiente a demostrar la configuración de este daño, toda vez que ni siquiera se ha determinado, la existencia de la oportunidad perdida. Luego, ni si quiera la parte ha podido precisar en qué se circunscribe el daño supuestamente sufrido y por el cual debe ser indemnizado, de tal manera que solo hay evidentes intenciones de ganancia que no corresponden a un daño tangible, cierto y preciso.

Es menester, traer a consideración el postulado de la H. Corte Suprema frente al tema en particular, para ello resulta de utilidad lo dispuesto en la sentencia SC5885-2016, en donde se explica de manera detallada los presupuestos que componen esta tipología de daño y los supuestos para que pueda ser indemnizado, veamos:

*“(…) Sus presupuestos axiológicos, para que pueda considerarse como daño indemnizable según la elaboración jurisprudencial de esta Corporación refieren a: (i)* ***Certeza respecto de la existencia de una legítima oportunidad****, y aunque la misma envuelva un componente aleatorio, la “chance” diluida debe ser seria, verídica, real y actual; (ii)* ***Imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad*** *para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual e hipotético, no susceptible del reconocimiento de una indemnización […]; y (iii)* ***La víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado; no es cualquier expectativa o posibilidad la que configura el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles****, no puede aceptarse que […] su frustración inevitablemente conllevaría en la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos (…)”*

De lo anterior, es pertinente resaltar que ninguno de los presupuestos que ha definido la jurisprudencia se encuentran satisfechos porque: (i) ni siquiera en el escrito de demanda se ha expresado puntualmente cuál es la oportunidad perdida, es decir no hay certeza; (ii) no se expresa en que consiste el detrimento como consecuencia de la oportunidad presuntamente frustrada por el evento dañoso y; (iii) de los sustentos fácticos y material probatorio no se vislumbra si quiera un resultado que esperaban las víctimas, es decir no existe la oportunidad y el daño es netamente fantasioso.

Consecuentemente, se tiene que, en definitiva, olvidó la parte demandante que para que se considere que se consumó una pérdida de oportunidad, la existencia del chance debe estar acreditada de forma suficiente, siendo esta una legítima oportunidad seria, verídica, real y actual, circunstancia que no sucedió, pues se reitera que la demanda se caracteriza por su orfandad probatoria. Efectivamente, se destaca que no es procedente indemnizar una mera expectativa que ni siquiera se define en el escrito de demanda, circunstancia que implica necesariamente el fracaso de esta pretensión.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

**EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO**

1. **FALTA DE COBERTURA MATERIAL POR LA CONFIGURACIÓN DE UN RIESGO EXPRESAMENTE EXCLUIDO EN LA PÓLIZA No. CCS 2000129486 Y DE LA PÓLIZA No. CCS 2000129513**

Sin que ello signifique que se está reconociendo la existencia de una obligación a cargo de mi procurada, se propone esta excepción teniendo en cuenta las condiciones generales de las Pólizas vinculadas donde se establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional de mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio. En este sentido, así como lo objeto mi representada de la prueba documental aportada, relaciona como conductor de nuestro vehículo asegurado al señor Junior Manuel Álvarez, pero para la fecha del accidente, este no se encontraba con licencia de conducción habilitada para conducir vehículos de esta categoría. Siendo esta conducta una causal de exclusión para la afectación de las pólizas de Responsabilidad Civil de acuerdo con el numeral 2.14 del condicionado general de la póliza.

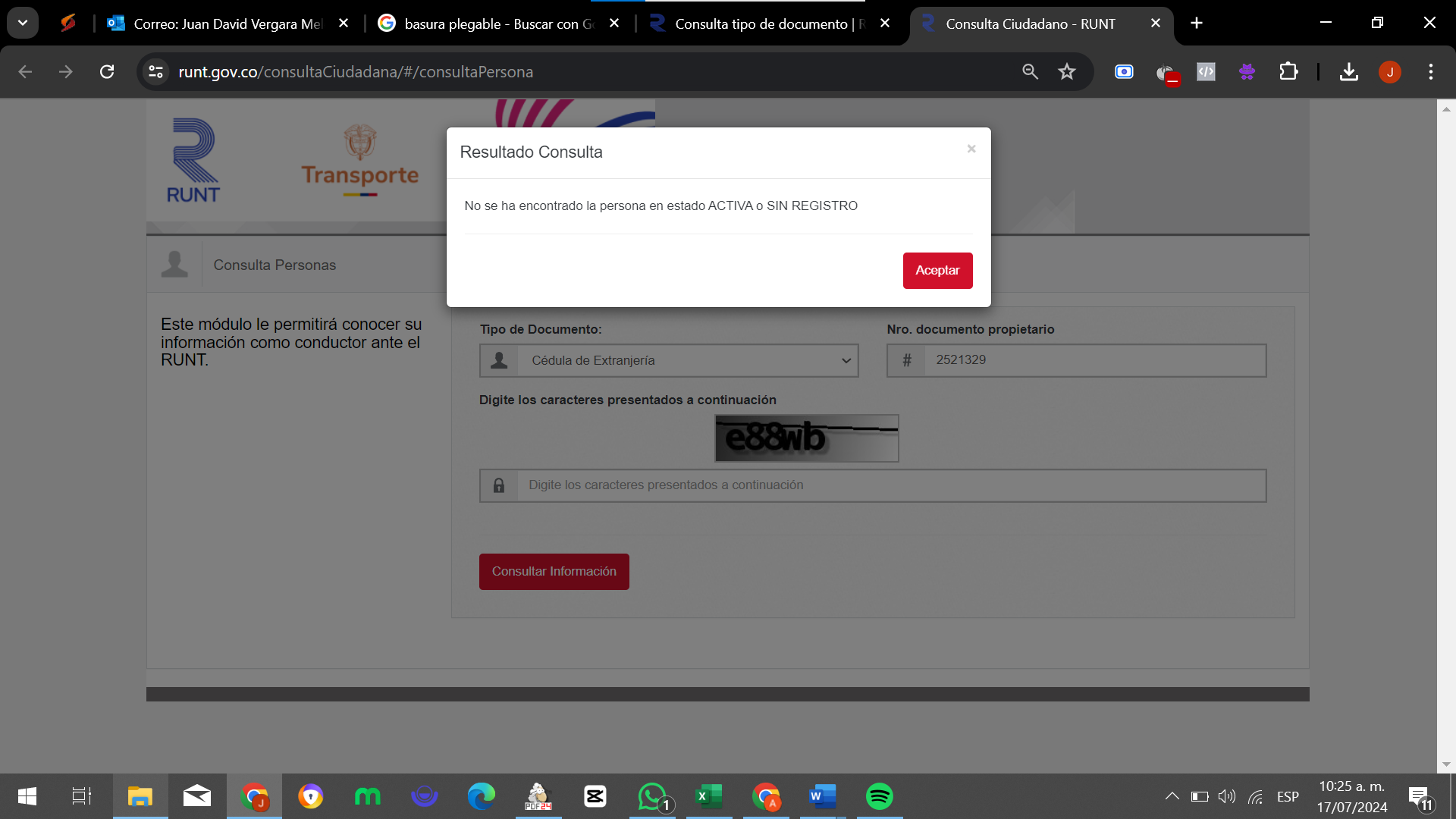
Lo anterior, con fundamento en el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(…) *Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (…)*”.

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como **exclusiones.**

Descendiendo al caso en concreto como se menciona, dentro de las exclusiones pactadas en las condiciones generales del contrato de seguro se excluye de la cobertura aquel accidente causado cuando el conductor no posea licencia de conducción o habiéndola tenido se encontrare suspendida o cancelada o esta fuere falsa o no fuere apta para conducir el vehículo de la clase o condiciones estipuladas.



Como se podrá demostrar en el curso de litigio, el señor Junior Manuel Álvarez no tenía licencia de conducción habilitada para conducir el vehículo de placa VCN 804. Como se puede observar de la busqueda realizada en el Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) con la identificación del señor Junior Manuel Alvarez, la misma “No se ha encontrado la persona en estado ACTIVA o SIN REGISTRO”.



.

Entonces, en virtud del Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador tiene la potestad de delimitar los riesgos que asume mediante la inclusión de exclusiones en la póliza de seguro. Estas exclusiones establecen condiciones bajo las cuales el asegurador no está obligado a prestar cobertura. En el caso concreto, una de las exclusiones especifica que no se cubrirán accidentes causados por conductores que no posean una licencia de conducción válida o cuya licencia esté suspendida, cancelada, sea falsa, o no apta para el tipo de vehículo conducido. En el litigio presente, se demuestra que el señor Junior Manuel Álvarez no tenía una licencia de conducción habilitada para operar el vehículo de placa VCN 804, según consta en el Registro Único Nacional de Transporte (RUNT). Este hecho activa la exclusión mencionada, eximiendo al asegurador de la obligación de cubrir el siniestro. La validez de esta exclusión subraya la importancia de cumplir con los requisitos legales para la conducción de vehículos asegurados y justifica la decisión del asegurador de negar la cobertura en este caso específico.

En resumen, la facultad del asegurador para definir los riesgos cubiertos, como se establece en el Artículo 1056 del Código de Comercio, permite la inclusión de exclusiones específicas en las pólizas de seguro. En el caso de Junior Manuel Álvarez, la exclusión relevante se refiere a la conducción sin una licencia válida. Dado que el RUNT indica que Álvarez no tenía una licencia activa, la exclusión se aplica, eximiendo al asegurador de la obligación de cobertura. Este caso ilustra cómo las exclusiones en las pólizas aseguran el cumplimiento de requisitos legales y contractuales, justificando la negativa de la cobertura en situaciones que no cumplen con estos estándares.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO NI LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.**

Es necesario aclarar que, para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso: (i) no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por los demandantes, toda vez que no hay certeza de la fecha en la que ocurrió ciertamente el accidente de tránsito, resaltando que el IPAT no es prueba técnica ni dictamen pericial que acredite responsabilidad, y; (ii) la parte demandante no ha probado la cuantía de lo pretendido puesto que sus pretensiones se fincan en meros supuestos ilusorios sin soporte alguno. Por contera, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de la compañía de seguros.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció: “*(…) ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso (…)”.* De otro lado, el artículo 1072 del Código de Comercio, estableció: *“(…) <DEFINICIÓN DE SINIESTRO>. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado (…)”.*

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema, en el siguiente extracto:

“*(…) Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (…)”*[[27]](#footnote-27) (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro. Consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia lo siguiente:

*“(…) 2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

*2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*

*2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario” (art. 1089, ib.) (…)”[[28]](#footnote-28).*

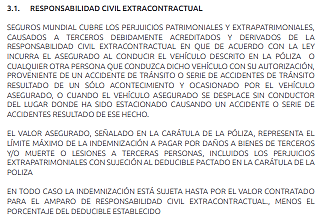
La Corte Suprema de Justicia, ha establecido lo siguiente frente a la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

*“(…)* ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio.*** *En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios (…)”*[[29]](#footnote-29) (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado o beneficiario quiera hacer efectivo el amparo, deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador. A efectos de aclararle al Despacho las razones por las que no se encuentran cumplidas las cargas del artículo 1077, divido la excepción en dos subcapítulos, que permitirán un mejor entendimiento del argumento.

* + - * 1. **La no realización del Riesgo Asegurado**

De conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 con vigencia entre el 15 de marzo del 2021 y el 15 de marzo del 2022, podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. El amparo de responsabilidad civil extracontractual que se pretende afectar se concertó en los siguientes términos:



En este orden de cosas, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora “*(…) cubre los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, causados a terceros debidamente acreditados y derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que de acuerdo con la ley incurra el asegurado al conducir el vehículo descrito en la póliza o cualquier otra persona que conduzca dicho vehículo con su autorización, proveniente de un accidente de tránsito o serie de accidentes de tránsito resultado de un sólo acontecimiento y ocasionado por el vehículo asegurado, o cuando el vehículo asegurado se desplace sin conductor del lugar donde ha sido estacionado causando un accidente o serie de accidentes resultado de ese hecho (…)*”. Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues conforme se explicó en el pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones de la demanda, en el proceso no se puede determinar de forma alguna la responsabilidad por parte del señor del conductor del vehiculo de placas VCN 804, pues es importante poner en conocimiento desde ya el Despacho, que NO HAY siquiera un medio de prueba a través del cual el apoderado de los demandantes acredite la ocurrencia del accidente de tránsito como responsabilidad del vehículo asegurado.

En este sentido teniendo en cuenta que mi representada es vinculada al proceso en virtud de los contratos de seguro que amparan al vehículo de placas VCN 804, no existe responsabilidad de conductor del vehiculo asegurado, y por no tanto, no es posible acreditar los elementos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio para hacer exigible la obligación indemnizatoria en cabeza de la compañía de seguros que represento.

Todo lo anterior es de fundamental importancia, pues no existen medios probatorios que acrediten los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de la compañía de seguros, pues no se encuentra dentro del plenario probanza alguna que determine de forma fehaciente la responsabilidad del conductor del vehículo de placas VCN 804. En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado. Máxime cuando se estructuro la exclusión pactada en la Póliza de Seguro por el conductor no portar licencia de conducción y con la falta de material probatorio que corrobore la responsabilidad del extremo pasivo.

* + - * 1. **Acreditación de la cuantía de la pérdida.**

Ahora bien, en relación con la demostración de la cuantía, debe resaltarse Señor Juez que, en línea a lo que se ha mencionado, los perjuicios que están siendo pretendidos en el escrito de demanda no se han demostrado dentro del presente litigio. En primer lugar, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. Así mismo, en lo que respecta al daño moral y daño en la vida en relación no puede el demandante probar tampoco dicha afectación por cuanto, no se ha demostrado un nexo de causalidad entre las lesiones y la ocurrencia del accidente de tránsito. Finalmente, de acuerdo con lo establecido jurisprudencialmente no se cumplen con los parámetros exigidos para reclamar una indemnización por pérdida de oportunidad y los intereses moratorios sólo resultan a partir de la demostración del siniestro y la cuantía (artículo 1077 y 1080 del Código de Comercio) situación que no se ha demostrado en la presente Litis. De esa forma, es claro que no ha nacido la obligación condicional del Asegurador.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que los ocntratos de seguro vinculados no podrán ser afectadas por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado.

Por el contrario, se observa de manera evidente, la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al conductor del vehículo de placa VCN 804, a su propietario y a mi mandante, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. Por otro lado, respecto de la acreditación de la cuantía de las sumas perdidas no se encontraron probadas, comoquiera el lucro cesante, y los perjuicios extrapatrimoniales solicitados son improcedentes e injustificados, teniendo en cuenta que no existen pruebas ciertas que acrediten plenamente dichas tipologías de perjuicios deprecados en la demanda con ocasión al accidente de tránsito, pues basta con remitirnos al expediente, a fin de establecer dicha orfandad de pruebas. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1072 y 1077 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

1. **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE A COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS Y LOS DEMÁS DEMANDADOS**

Se formula esta excepción en razón a que Compañía Mundial de Seguros.no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa VCN 804 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no se convino la solidaridad entre las partes del contrato. La H. Corte Suprema de Justicia ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia[[30]](#footnote-30), la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte[[31]](#footnote-31) igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…)* ***La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.*** *De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y* ***si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización****. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)”* (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de la póliza de seguro aquí vinculada, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 22 de febrero del 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite comoquiera que su relación con el vehículo de placa VCN 804 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

1. **EL SEGURO CONTENIDO EN LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL BÁSICA PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO No. C2000129486 Y LA PÓLIZA NO. 2000129513 CON SON DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO**

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, por lo tanto otorgar una indemnización por concepto de lucro cesante; daño moral; daño a la salud; daño a la vida en relación; y pérdida de oportunidad, cuando no se han producido los supuestos de su procedencia, contraría el carácter meramente indemnizatorio y se avalaría un enriquecimiento sin causa.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

*“(…)* ***Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio.*** *La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (…)”[[32]](#footnote-32)* (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En concreto se advierte que los rubros indemnizatorios solicitados por la parte demandante carecen de fundamento fáctico y jurídico y no pueden acogerse por parte del despacho, puntualmente por las siguientes razones:

* + 1. Respecto del lucro cesante consolidado y futuro, la parte demandante solicita el reconocimiento del mismo por una suma equivalente a $ 70’202.925 pesos sin haber acreditado de manera cierta la actividad laboral del señor Murillo Valencia, ni los ingresos económicos para la fecha de los hechos demandados. (a) En el expediente no reposa ningún certificado laboral o de ingresos o documento similar tendiente a acreditar la actividad laboral o económica del demandante; (b) El señor Hugo Fernelis Murillo Valencia no trabaja (pues lo contrario no se encuentra demostrado), ni genera ingresos, por lo tanto, los hechos del 22 de febrero del 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; y (ic) No se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que determine de forma cierta el origen de alguna pérdida.
    2. Frente a los perjuicios extrapatrimoniales, cabe destacar que los mismo fueron solicitados sin el respaldo probatorio que acredite que los demandantes han incurrido en dichos perjuicios, resaltando que el cálculo es exagerado y desconoce claramente las directrices jurisprudenciales.

En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión sin sustento alguno, es evidente que aquellas están llamadas al fracaso puesto que no podría avalarse un enriquecimiento que contraríe el principio meramente indemnizatorio que reviste al contrato de seguro, pues se vulnera la disposición que establece su carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace la parte demandante sobre el concepto de daño moral es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

1. **IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR AL PAGO DE INTERESES MORATORIOS TODA VEZ QUE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA NO HA NACIDO**

Es claro que para que nazca a la vida la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de mi representada, se requería que el asegurado cumpliera con la carga establece en el artículo 1077 del C.Co., ante la ausencia de acreditación de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida no puede predicarse la existencia de obligación alguna y por ende tampoco puede considerarse que mi representada se encuentre en mora, dado que, no es posible predicarse la mora de una obligación inexistente, por lo dicho es claro que ningún respaldo encuentra la solicitud de pago de intereses de mora cuando por la parte demandante, no ha demostrado la responsabilidad civil extracontractual en cabeza del vehículo asegurado y tampoco la cuantía de la perdida. Por lo anterior mientras se encuentren insatisfechos los dos presupuestos anteriores no es posible afirmar que haya nacido obligación alguna y mucho menos que se encuentre insatisfecha.

Debe decirse que en este caso se encuentra insatisfecho el cumplimiento de la acreditación del siniestro y la cuantía de la perdida y que siendo estos dos elementos esenciales en los términos del artículo 1077 del C.Co., para acreditar el derecho a recibir una indemnización por parte del asegurador debe afirmarse enfáticamente que mientras no se pruebe tales presupuestos no es posible considerar que ha nacido a la vida jurídica la obligación indemnizatoria y sobre todo condicional de Compañía de Seguros Mundial. Por lo dicho, salta a la vista en esta instancia no se ha acreditado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida, y por ende no podría tampoco predicarse la mora de una obligación que no ha surgido como consecuencia de la misma omisión en la acreditación.

Ahora bien, debe dejarse claro que en el hipotético y remoto evento en que el Honorable Despacho considere que la indemnización es procedente y que existe obligación por parte de Compañía Mundial de Seguros, se deberá tener en consideración que la certeza sobre dicho derecho sólo quedará probado al momento de proferirse sentencia, porque en ninguna medida la parte Demandante demostró la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, por lo que si el Despacho encontrara sustento de tal pretensión es claro que ello implicaría que los presupuestos del artículo 1077 del C.Co., se demostraron en el curso del proceso, después de surtirse el debate probatorio y por ende no podría condenarse al pago de intereses moratorios desde el momento en que se efectuó una solicitud de indemnización (que no es en ninguna medida una reclamación) sino únicamente a partir de la decisión judicial.

Como sustento de lo anterior, se encuentra que la Corte Suprema de Justicia en cuanto al momento en el que se empiezan a causar los intereses moratorios, ha establecido en distintas oportunidades que éstos empiezan a causarse a partir de la ejecutoria del fallo judicial que da certeza a la obligación. Específicamente, en la reciente sentencia del 26 de mayo de 2021, en la que se indicó textualmente lo siguiente:

*“(…)* ***Respecto del momento a partir del cual procedía disponer el pago de intereses moratorios****, conforme al análisis que se dejó consignado al estudiarse el cargo segundo del recurso extraordinario de casación, al que se hace remisión expresa, se colige el desacierto de la fecha fijada por el a quo con tal fin -6 de septiembre de 2010-, misma señalada por el Tribunal, la cual, por ende, deberá modificarse, para* ***disponer que la eventual causación de los indicados réditos, será a partir de la ejecutoria del presente fallo*** *(…)”[[33]](#footnote-33)*

Aunado al anterior pronunciamiento, es relevante resaltar cómo la Corte Suprema ha dicho que la sanción a la que corresponde los intereses de mora no puede ser aplicada de manera objetiva, sino que debe atenderse al caso concreto a fin de evaluar el motivo de retardo en el pago, lo anterior en palabras de la Corte al indicar que:

*“(...) De igual modo, en providencia del 29 de abril de 2005, reiteró: “ a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el artículo 1080 del C. de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños”*

*Los fragmentos jurisprudenciales que acaban de citarse explican que la aseguradora sólo incurre en mora cuando no paga la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si ésta se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de las carga probatorios sobre la existencia del siniestro y el valor del daño.*

*Pero esta sanción-ha afirmado esta Corte-no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo de retraso en la liquidación.*

*En ese orden- prosiguió esta corporación- si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño, y logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar a imponerle sanción alguna, porque es claro que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se debió a su culpa, tal como ha sido explicado por esta sala: “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria (…)”[[34]](#footnote-34). (Sentencia de 27 de agosto de 2008.Exp- 1997-14171-01”*

Lo anterior, deja claro que como a la fecha no se ha demostrado que ocurriera el siniestro es decir la responsabilidad extracontractual a cargo del asegurado. De este modo, es claro que únicamente con la decisión final que adopte el juzgador se podrá establecer si efectivamente se cumplen las cargas del artículo 1077 del C.Co., y en efecto se otorgará certeza al derecho pretendido, por lo que de ninguna manera se podría condenar al pago de intereses moratorios desde que el demandante efectuó la solicitud de indemnización comoquiera que tal pedimento nunca se constituyó en una verdadera reclamación que acreditara los dos presupuestos antes enunciados. Luego, antes de proferirse el fallo no existe certeza sobre la obligación presuntamente pendiente de indemnizar.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

1. **EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LAS PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL BÁSICA PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO NO. C2000129486 Y LA PÓLIZA NO. 2000129513**

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 con vigencia entre el 15 de marzo del 2021 y el 15 de marzo del 2022, y en la Póliza No. 2000129513 con vigencia del 15 de marzo del 2021 al 15 de marzo del 2022, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, cabe mencionar que, en el remoto evento y muy improbable escenario de que a mi procurada se le hiciera exigible la afectación del negocio contractual expedido por ella, mediante la cual se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, se estipularon las condiciones, los límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, los deducibles pactados, etc. De manera que exclusivamente son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, incluso y sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“*(…)* ***ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.*** *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)*”.

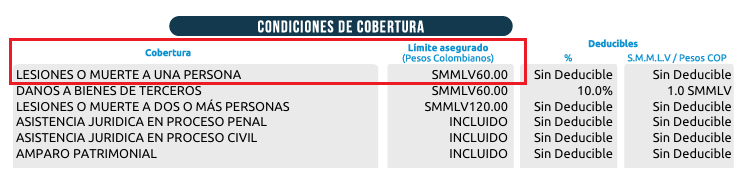
La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar lo siguiente:

“*(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)*”[[35]](#footnote-35).

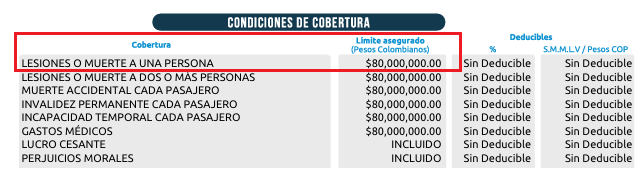
Téngase en cuenta que expresamente en el certificado la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 con vigencia entre el 15 de marzo del 2021 y el 15 de marzo del 2022, y en la Póliza No. 2000129513 con vigencia del 15 de marzo del 2021 al 15 de marzo del 2022 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que en las pólizas vinculadas se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

**En la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 con vigencia entre el 15 de marzo del 2021 y el 15 de marzo del 2022:**



**En la Póliza de Repsonsabilidad Civil COMBINADA, No. 2000129513 con vigencia del 15 de marzo del 2021 al 15 de marzo del 2022:**



Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a las vigencias comprendidas del 15 de marzo del 2021 al 15 de marzo del 2022

Así mismo, resulta importante exponer que, de cara a lo previsto en el Art. 1078 y 1089 del C.Co., la suma pactada en el contrato de seguro, corresponde a los salarios mínimos del año 2022, fecha en la cual ocurrió el accidente de tránsito objeto del litigio, tal cual lo describe la norma antes relacionada así:

*“(…) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074.*

*(…) “ARTÍCULO 1089. LIMITE MÁXIMO DE LA INDEMNIZACIÓN. Dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario.*

*Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Este, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él. (…)” (resaltado propio)*

Así las cosas, y colindado con lo antes expuesto, en la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguraticio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de ***60 SMLMV*** para el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual C2000129486 por “lesiones a una persona”, los cuales ascienden a $60’000.000 de pesos para la fecha de ocurrencia del accidente y la suma de $80’000.000 para la Póliza CCS 2000129513, de acuerdo con el amparo de “lesiones a una persona”. De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

1. **LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMBINADA No. 2000129513 OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL BÁSICA**

**.**

1. **DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS**

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley en virtud de lo reglado en el artículo 282 del Código General del Proceso.

1. **OPOSICIÓN MEDIOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR EL DEMANDANTE**
2. **Contradicción al dictamen pericial**

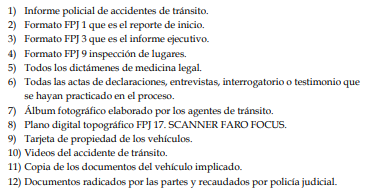
Solicito se decrete la contradicción de los dictamenes periciales, en el eventual caso que se decrete por parte de este despacho judicial a favor de la parte actora, con fundamento en los términos del artículo 228 del Código General del Proceso:

*“(...) La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor (…)*”

En conclusión, bajo el anterior precepto normativo,y encontrandome en oportunidad para hacerlo solicito que en caso de ser decretado algún dictamen pericial en favor de la parte actora, sea contradicho en la respectiva audiencia de pruebas.

1. **Oposición a oficios**

La parte actora dentro de su escrito de demanda solicita que se sirva oficiar a la Fiscalía 43 Local de Cali para que allegue al presente proceso lo siguiente:



Sin embargo, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso *“(…) El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”.* Por lo tanto, de acuerdo con los documentos obrantes dentro del plenario no existe ninguno que acredite que la parte haya intentado conseguir, mediante petición, la prueba solicitada. Por lo cual, el Despacho debe abstenerse de ordenar su práctica.

1. **Oposición a inspección judicial**

De acuerdo con el artículo 236 del Código General del Proceso, “*(…)Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba. (…)”.* No obstante de acuerdo con la solicitud probatoria del demandante, este medio tiene como objeto probar las caracteristicas de la vía, señales de tránsito, demarcación de carriles y sentidos viales, además probar donde fue el punto de impacto y donde quedaron ubicados los cuerpos. En primer lugar, el objeto de la prueba puede ser evacuado con el IPAT que obra dentro del expediente y con la declaración del agente de tránsito por lo que se hace inane su practica. De contera, las condiciones del lugar después de 3 años no lo logran acreditar de forma fehaciente lo que pretende demostrar el demadante y tampoco la ubicación de los vehículos por no ser posible su razonabilidad.

1. **PRUEBAS SOLICITADAS Y APORTADAS POR COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.[[36]](#footnote-36)**

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

1. **DOCUMENTAL**

* Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 junto con su condicionado general.
* Póliza de Responsabilidad Contractual Combinada No. 2000129513 junto con su condicionado general.

1. **INTERROGATORIO DE PARTE.**

**A.** Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte de Hugo Fernelis Murillo Valencia (Lesionado), Catalina Orejuela De Muñoz (Compañera Permanente) y Lola Emilfa Valencia De Ramirez (Mamá), en su calidad de demandantes, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la demanda.

**B.** Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a los demandados, el señor Junior Manuel Álvarez (Conductor) y Álvaro Enrique Soto Narváez (Propietario) en su calidad de demandados, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en cada una de sus contestaciones.

1. **DECLARACIÓN DE PARTE**

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 y en la Póliza No. 2000129513.

1. **TESTIMONIALES**

Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y siguientes del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES**, identificada con C.C. No. 1.061.751.492 de Popayán, con dirección de notificaciones [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com) para que declare sobre las condiciones generales y particulares de la Póliza de Responsabilidad Civil Básica para Vehículos de Servicio Público No. C2000129486 y en la Póliza No. 2000129513, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.

1. **DICTAMEN PERICIAL**

Comedidamente anuncio que me valdré de un informe de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo.

El medio de prueba anunciado es conducente, pertinente y útil, por cuanto pretende ilustrar al despacho, de forma técnica y científica, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos demandados.

Dicha prueba pericial se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo, además, el término de traslado no fue suficiente para elaborar y aportar el dictamen pericial.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

1. **ANEXOS**

* Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
* Poder general otorgado al suscrito por COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. mediante escritura Publica No. 13771 de la Notaría 29 de Bogotá para representar a la compañía aseguradora en el presente trámite.
* Certificado de existencia y representación legal de Compañía Mundial de Seguros expedido por la Cámara de Comercio de Cali y por la Superintendencia Financiera de Colombia.

1. **NOTIFICACIONES[[37]](#footnote-37)**

Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados, donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

Mi representada, COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. en la Calle 33 # 6b - 24, en la ciudad de Bogotá. Dirección de correo electrónico [mundial@segurosmundial.com.co](mailto:mundial@segurosmundial.com.co)

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

De usted Señor Juez, cordialmente,

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.

1. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736. [↑](#footnote-ref-2)
3. Código General del Proceso, artículo 96 numeral 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008 [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300. [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Constitucional. Sentencia T-475/18. M.P. Alberto Rojas Ríos. [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC7978-2015. Radicado 2008-00150 [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 26 de octubre de 2000. MP. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 5462. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. [↑](#footnote-ref-9)
10. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada. [↑](#footnote-ref-10)
11. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01 . Junio 12 de 2018 [↑](#footnote-ref-11)
12. Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 19753. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. [↑](#footnote-ref-12)
13. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-13)
14. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4966-2019. Expediente 2011-00298. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sentencia de casación civil del 13 de mayo de 2008, Exp.1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-15)
16. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona) [↑](#footnote-ref-16)
17. Ídem [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 07/03/2019. MP Octavio Augusto Tejeiro Duque, Rad: 05001 31 03 016 2009-00005-01. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Prueba de los Perjuicios Morales Subjetivados. Pág. 508. [↑](#footnote-ref-19)
20. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103-006-1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-20)
21. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de noviembre de 2019, radicado 73001-31-03-002-2009-00114-01. [↑](#footnote-ref-21)
22. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC5340-2018 de 7 de diciembre de 2018. Magistrado

    Ponente: Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sentencia SC9193-2017, Rad. 11001-31-03-039-2011-00108-01, 28 de junio de 2017, M.P. Ariel Salazar

    Ramírez [↑](#footnote-ref-23)
24. Sentencia SC 562-2020, Rad. 73001-31-03-004-2012-00279-01, 27 de febrero de 2020, M.P. Ariel Salazar

    Ramírez. [↑](#footnote-ref-24)
25. Corte suprema de Justicia, sentencia SCT16743 del 2019, MP. Luis Armando Tolosa. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibidem [↑](#footnote-ref-26)
27. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.° 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO [↑](#footnote-ref-28)
29. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501 [↑](#footnote-ref-29)
30. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibídem. [↑](#footnote-ref-31)
32. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-32)
33. Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC1947-2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. 26 de mayo de 2021. [↑](#footnote-ref-33)
34. Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 5681 de 2018, MP. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-34)
35. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-35)
36. Código General del Proceso, artículo 96 numeral 4. [↑](#footnote-ref-36)
37. Código General del Proceso, artículo 96 numeral 5. [↑](#footnote-ref-37)